

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°097

Medellín, veinticuatro (24) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelven los recursos de apelación interpuestos y el grado jurisdiccional de consulta, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **MARÍA ESNEDA GARCÍA BERRIO** contra **PROTECCIÓN S.A.** y **COLPENSIONES**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La demandante solicita que se declare la ineficacia de su vinculación al RAIS; y, en consecuencia, se declare que se encuentra afiliada al RPM administrado en la actualidad por **Colpensiones**.

Como consecuencia de lo anterior condene a **Protección S.A.** a trasladar a **Colpensiones** las cotizaciones y rendimientos recibidos y a esta última administradora a recibirlos teniéndola como su afiliada.

Además, se condene a **Colpensiones** a reconocer la pensión de vejez bajo las prerrogativas establecidas en la Ley 100 de 1993.

Hechos

Como fundamento de sus pretensiones indica que nació el **12 de septiembre de 1958** y que desde el mes de septiembre de 1994 ha prestado sus servicios a la **Fiscalía General de la Nación**, estando afiliada desde ese momento y hasta la actualidad al Régimen de Pensiones a través del RAIS, en concreto con la **AFP Protección S.A.**

Al momento de afiliarse al Sistema de Pensiones, la asesora de **Protección S.A.** no le informó acerca de la existencia de 2 regímenes pensionales y de las diferencias existentes entre estos.

Respuesta Colpensiones

Colpensiones a través de apoderada indicó que son ciertos los hechos, anotando que no le consta las condiciones en las que la actora se vinculó al RAIS, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir la ineficacia o nulidad de traslado, ausencia de prueba de engaño, equivocada información y perjuicio padecido, indebida aplicación de la carga probatoria, imposibilidad de condena en costas, cobro de lo no debido, compensación, y presunción de legalidad de los actos jurídicos.

Respuesta Protección S.A.

Protección S.A. a través de apoderada manifestó que son ciertos los hechos, excepto el que tiene que ver con la falta al deber de información, pues esa AFP suministro una asesoría oportuna, pertinente, objetiva y comprensible a la actora.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, y aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del Sistema General de Pensiones.

Sentencia de primera instancia

El Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia **13 de marzo de 2023**, **declaró** la ineficacia del traslado al RAIS, **condenando** a **Protección S.A.**, a trasladar a **Colpensiones**, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, el saldo existente en las cuentas de ahorro individual de los demandantes, con sus correspondientes rendimientos

financieros, frutos e intereses y el bono pensional si este fue redimido. Asimismo, y con indexación trasladarán en el mismo término, lo descontado de las cotizaciones de estos demandantes, por conceptos tales como lo destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, los gastos de administración y el valor de las primas del seguro previsional y reaseguros.

Al momento de cumplirse estas órdenes, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen para cada uno de estos demandantes.

De otro lado, le ordenó a **Colpensiones**, activar la afiliación de la demandante al RPM que administra y recibir todos los dineros que le sean trasladados por **Protección S.A.**, realizando la respectiva actualización de la historia laboral.

Finalmente, condenó al pago de la pensión de vejez de la actora una vez a accionante acredite el retiro del servicio público como empleada de la Fiscalía General de la Nación.

Esta decisión no la compartieron los apoderados de la parte demandada, motivo por el cual la impugnaron en los siguientes términos:

Recurso Protección S.A.

La recurrente solicita que se **revoque** la decisión de primera instancia, por cuanto la vinculación realizada en el año 1994 cumplió con los estándares exigidos para esa fecha que exigían la entrega una información necesaria y transparente.

Destaca que la demandante nunca estuvo vinculada al RPM y en esa medida la selección inicial de régimen no permite que al ser declarada la ineficacia pueda elegir el régimen de prima media teniendo en cuenta que la actora nunca realizó una cotización al régimen de reparto, por lo que permitir su traslado afectaría la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, aspecto que fue estudiado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL-4211-2021 y SL-1806-2022.

Recurso Colpensiones

Por su parte el apoderado de **Colpensiones** señalo que con el traslado al RAIS no se advierte que el consentimiento de la actora estuviera viciado al momento

de la vinculación al RAIS, además de que estuvo vinculada a ese régimen durante un periodo significativo de tiempo.

De otro lado, solicita que en el caso de que los aportes trasladados del RAIS no sean equivalentes a los rendimientos obtenidos de permanecer afiliado al RPM, se ordene a **Protección S.A.** realizar el pago de la respectiva diferente.

Finalmente, solicita que no se imponga condena en costas a su cargo, en la segunda instancia.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado, la apoderada de **Colpensiones** solicitó que se revoque la decisión de primera instancia, toda vez que no se cumple con los presupuestos para trasladarse entre regímenes pensionales y en esa medida la orden del a-quo afectaría la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

En caso de no acogerse este argumento solicitó que la orden a la AFP del RAIS incluya la obligación de restituir todas las sumas recibidas con motivo de la afiliación de la actora.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta segunda instancia conforme con el recurso de apelación interpuesto y el grado jurisdiccional de consulta, serán: (i) determinar si el acto jurídico que generó el traslado de régimen del demandante resulta o no eficaz, (ii) establecer cuáles son las consecuencias jurídicas de la declaratoria de ineficacia, (iii) revisar si operó la prescripción y (iv) Determinar si el Juez Ordinario Laboral cuenta con competencia para resolver la solicitud pensional de la actora teniendo en cuenta que se trata de una empleada pública.

Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas que obran en el expediente:

1. La señora **María Esneda García Berrio** nació el **12 de septiembre de 1958** (02/pág.49).

2. La actora suscribió formulario de vinculación al sistema de pensiones a través de **Protección S.A.** el día 6 de septiembre de 1994, teniendo como empleador a la **Fiscalía General de la Nación** (12/pág.38).
3. De conformidad con historia laboral expedida el 7 de febrero de 2023, la actora contaba con 1457 semanas de cotización, siendo su último empleador la **Fiscalía General de la Nación** (12/págs.66-82).

Efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento:

De la obligación de información al momento de vincularse al Sistema General de Pensiones Consagrado en la Ley 100 de 1993

De conformidad con el recurso interpuesto por la apoderada de **Protección S.A.** es necesario determinar si en aquellos eventos en que la vinculación inicial al sistema de seguridad social en pensiones se dio a través de una AFP del RAIS es procedente la declaratoria de ineficacia.

Para dar respuesta a este cuestionamiento se debe recordar que por mandato del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, la afiliación que atente contra el derecho de selección “...*quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.*”

En cuanto al deber de información a cargo de las administradoras de pensiones ha sido reiterativa la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte de Justicia, que en sentencias como la SL1688 de 2019, SL4360 de 2019, SL4426 de 2019, SL2611 de 2020, SL2877 de 2020, SL-1217 de 2021 y SL782 de 2021, ha insistido que debe cumplir con dos características: necesidad y transparencia.

Lo anterior significa, que, el fondo de pensiones que pretende captar un afiliado le debe explicar: la posibilidad de elegir entre dos regímenes pensionales, los cuales presentan características que les son propias y pueden resultar ventajosas o desventajosas, pero además que una vez seleccionado un régimen se cuenta con la posibilidad de movilidad cumpliendo unas condiciones mínimas de vinculación (información necesaria) y dicha exposición debe hacerse en un lenguaje claro, simple y comprensible (transparencia).

Este deber sustancial, trae aparejada una carga en lo procesal, que consiste en demostrar que al momento en que se presentó ante su posible afiliado para que

suscribiera su vinculación le suministró una información calificada, en la que se le explicó ventajas y desventajas de su elección, pues solo a partir de ese conocimiento se puede concluir que se garantizó el derecho de selección.

Sobre la **carga de la prueba** es importante remitir a la sentencia SL4426-2019, donde como argumento adicional se explica que la afirmación -de que no se recibió información- tiene la naturaleza de indefinida, y ello implica que la parte frente a la que se aduce deba iniciar una labor probatoria para demostrar lo contrario, esto es, que suministró una información necesaria y transparente, lo que no se cumple con el formulario suscrito, pues ello no da cuenta de la existencia de una asesoría, siendo apenas la demostración de un consentimiento informado y el cumplimiento de una formalidad exigida por la legislación.

Teniendo claras las características que debía cumplir la información y la carga procesal en cabeza de **Protección S.A.**, se debe revisar si se demostró la afirmación contenida al dar respuesta a la demanda, en el sentido de que le brindó a su futura afiliada una asesoría oportuna, pertinente, objetiva y comprensible, advirtiendo que al proceso no se trajo elemento alguno en este sentido, lo que conduce a concluir que la selección de régimen pensional no respetó el derecho de elección.

En este punto se debe destacar que si bien la apoderada de la AFP privada indica que del acto de afiliación queda el formulario de afiliación documento que es suficiente para demostrar que se cumplieron los estándares que en materia de afiliación se exigían para **1994**, lo cierto es que la suscripción dicho documento¹, como de forma reiterada lo ha manifestado la jurisprudencia, apenas implica que hubo un consentimiento libre de vicios² pero no informado.

Sobre las obligaciones que recaen en las administradoras de pensiones es bastante ilustrativa la sentencia SL-782 de 2021, donde la Corte Suprema de Justicia indicó que según su línea jurisprudencial se debe declarar la ineficacia cuando quiera que:

¹En lo referente a la aplicación de la carga de la prueba se indicó en sentencia SL-081 de 2021, lo siguiente: “Por tal razón, si la parte actora alude a la ausencia de tal información, como ocurre en este caso, no es de su cargo demostrar tal omisión, pues corresponde a un hecho negativo. Por el contrario, es deber de la AFP traer a juicio los elementos de prueba que permitan establecer que, al momento de la afiliación, brindó las explicaciones suficientes y veraces sobre las consecuencias, beneficios y desventajas del traslado de régimen pensional. Así, si a la administradora se le adjudica el incumplimiento de su deber profesional y de no actuar con diligencia, entonces incumbe a ésta acreditar que sí atendió tales obligaciones. Además, es la entidad quien se encuentra en mejor posición probatoria para allegar los elementos de prueba requeridos para esclarecer hechos como los que aquí se discuten.”

² Sentencias SL-4426-2019, SL-782 de 2021 y SL-1743 de 2021.

...i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil, corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993, y en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.

A partir de lo expuesto, encuentra la Sala que al no demostrar **Protección S.A.** que cumpliera con su deber de informar, la consecuencia es que la afiliación efectuada al RAIS a través de ese fondo devenga ineficaz de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, declaración que por lo demás afecta el posterior traslado en el RAIS, por lo que en este aspecto se **confirmará** el fallo apelado.

De la convalidación de la ineficacia por el tiempo de permanencia en el RAIS

En el caso de autos, el apoderado de **Colpensiones** argumenta en su recurso que la permanencia de la actora sin manifestar alguna inconformidad respecto de su vinculación al RAIS es clara muestra de su voluntad de permanecer vinculada a dicho régimen y hace que su afiliación al mismo tenga plenos efectos.

Referente a este argumento, es necesario recordar que situaciones como la permanencia por un lapso significativo de tiempo en el RAIS o el traslado entre administradoras privadas no tienen como consecuencia el saneamiento de una vinculación afectada por la ineficacia, en tal sentido vale la pena remitir a la lectura de la sentencia SL-3349 de 2021, en la que, respecto de este tema, la Corte Suprema de Justicia, indicó:

Así como la Corte ha determinado que el hecho de tener sucesivas afiliaciones en el RAIS, después de haber abandonado el RPM, no tiene como consecuencia que de ello se derive una suerte de purga en el deber de información o de convalidación en su incumplimiento, tampoco el hecho de que el impugnante se haya vinculado, de manera discontinua al RAIS, aún con la misma administradora, significa per se que se tenga suficiente ilustración, conocimiento o comprensión de cada uno de los regímenes o que, se itera, tal situación releve del cumplimiento de sus deberes a la AFP, como lo exigen las normas aplicables en el momento en que acaezca tal evento.

Conforme con lo anterior, es claro que el acto declarado ineficaz no puede sanearse por el traslado entre administradoras del RAIS, por lo que en este punto fue acertada la decisión apelada, por lo que se **confirmará**.

De los efectos de la ineficacia

El Juez de primera instancia, condenó a **Protección S.A.** a trasladar a **Colpensiones** todos los conceptos que recibió con motivo de la afiliación al demandante.

Esta condena es recurrida por el apoderado de **Colpensiones** quien expresa su desacuerdo frente a la misma en el sentido de que debe ser adicionada para indicar que en el evento de que tales valores no sean suficientes para alcanzar los valores que habrían producido los rendimientos de la actora de estar afiliada al RPM, esa diferencia sea asumida por **Protección S.A.**

Con el fin de dar respuesta al recurso y de paso resolver el grado jurisdiccional de consulta en favor a **Colpensiones**, es relevante recordar que en este caso se está aplicando la ineficacia, como respuesta jurídica del ordenamiento jurídico por la transgresión de un deber legal y ello implica, que el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto, no produzca ningún efecto.

En ese orden, es importante hacer énfasis en lo enseñado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL-4360 de 2019, en la que indicó que: la sanción impuesta en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 consagra una **ineficacia en sentido estricto**, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado.

Siguiendo esta enseñanza la jurisprudencia ha indicado que debe darse aplicación al artículo 1746 del Código Civil que gobierna las restituciones mutuas en el régimen de nulidades, con la necesaria precisión de que al tratarse de un tema pensional, el juez del trabajo debe aplicar soluciones que compensen de manera satisfactoria el perjuicio que fue ocasionado a un afiliado por el cambio injusto de régimen pensional y ello implica que las AFP que se beneficiaron de ello trasladen a **Colpensiones**, todos los conceptos que recibieron.

En virtud de lo expuesto para la Sala es claro que durante el periodo en que el actor estuvo vinculada al RAIS, se privó a **Colpensiones** del cobro de los gastos de administración en su favor, y en ese orden el restablecimiento de las cosas a su estado inicial no puede perjudicar al fondo de naturaleza pública,

porque precisamente con fundamento en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, esta entidad tiene derecho a recibir 3 puntos porcentuales del aporte por gastos de administración, concepto que no fue recibido como consecuencia del acto declarado ineficaz.

En esa medida como la orden, emitida por el juez de primera instancia contempló la devolución en forma plena y retroactiva de todos los conceptos recibidos por la AFP del RAIS, con la misma se protege la sostenibilidad de régimen de prima media, aspecto respecto del cual tuvo oportunidad de pronunciarse la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL2877 de 2020, donde señaló:

... la decisión que se controvierte en casación tampoco lesiona el principio de sostenibilidad fiscal del sistema general de pensiones, puesto que los recursos que deben reintegrar los fondos privados accionados a Colpensiones serán utilizados para el reconocimiento del derecho pensional, con base en las reglas del régimen de prima media con prestación definida, lo que descarta la posibilidad de que se generen erogaciones no previstas

Así las cosas, queda resuelto el recurso presentado por el apoderado recurrente, indicando que se desestima su solicitud, sin embargo, siendo este un aspecto conocido en el grado de consulta es necesario dejar algunos aspectos claros en lo referente a los conceptos que deben ser devueltos por las AFP del RAIS cuando se declara la ineficacia y en ese sentido, esta Sala a partir del precedente jurisprudencial ha identificado los siguientes:

1. **Capital ahorrado:** Este concepto constituye el sustento financiero del pago de la prestación y conforme con lo dispuesto en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993 debe ser trasladado cuando exista movilidad del RAIS al RPM³.
2. **Rendimientos:** En igual sentido que el concepto anterior, soportan el pago de la pensión y se trasladan conforme a lo enseñado por el canon 113 ídem, destacando con respecto a estos como lo enseñara la Corte desde la sentencia 31989 de 2008, que su devolución se sustenta en que

³Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019, CSJ SL-2877-2020, CSJ SL-1442-2021, CSJ SL-1440-2021 y SL-782-2021.

el mayor valor de la cosa aprovecha al vendedor cuando la restitución se debe al incumplimiento del comprador⁴.

3. Los **gastos de administración**⁵, concepto consagra en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y cuyo valor corresponde a 3 puntos de la cotización obrero patronal efectuada, la cual se destina al pago de seguros previsionales, primas de seguros del Fogafín y la comisión correspondiente a la AFP por su gestión.

En lo referente al traslado de estos conceptos por parte de las administradoras del RAIS a **Colpensiones**, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha encontrado 2 razones fundamentales para soportar esta orden: (i) la declaración de ineficacia implica que las administradoras del RAIS nunca debieron recibir estos beneficios⁶, (ii) la devolución debe ser plena y con efectos retroactivos, porque estos recursos serán utilizados para la financiación de una pensión, aspecto que busca mantener el principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones⁷.

4. **Los aportes al fondo de garantía de pensión mínima:** el pago de estos aportes propio del RAIS y consagrado en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 no encuentra un equivalente en el RPM, motivo por el cual esta Sala ha sostenido que al declararse la ineficacia los dineros aportados por el afiliado a este fondo deben ser devueltos al RPM bajo los lineamientos del artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016⁸.

A partir de lo explicado, encuentra la Sala que le asistió razón a la juez de primera instancia en lo referente a las condenas que fueron impuestas a la AFP privada por lo que se **confirmará** la decisión de primera instancia.

De la excepción de prescripción

En lo que tiene que ver con la prescripción, encuentra la Sala que esta excepción no está llamada a prosperar, puesto que, la ineficacia es el resultado

⁴Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019, CSJ SL-2877-2020, CSJ SL-1442-2021, CSJ SL-1440-2021 y SL-782-2021.

⁵ Se deben asumir por el fondo de pensiones con cargo en su propio patrimonio y de forma indexada. En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL 782-2021, CSJ SL 1187-2021 y CSJ SL 1197-2021.

⁶ Sentencia SL-4360-2019.

⁷ Sentencia SL-2877-2020.

⁸En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL 2877-2020, CSJ SL-936-2021, CSJ SL-938-2021, CSJ SL-1410-2021CSJ y SL1442-2021.

del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos. En este sentido se remite a la lectura de las sentencias SL-1688 de 2019, SL- 3202 de 2021 y SL 3199 de 2021.

Del reconocimiento de la pensión de vejez

Frente al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la demandante en declaración de parte manifestó que su condición era la de empleada publica, desempeñándose en el cargo de “*Asistente Fiscal II*” en la **Fiscalía General de la Nación** (min.34:00), luego al ostentar esta condición y al activarse con la declaratoria de ineficacia realizada en la sentencia su vinculación a **Colpensiones**⁹, no es competencia de esta jurisdicción definir lo atinente al derecho pensional, por cuanto en tal sentido el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA, establece que esa jurisdicción conocerá de los procesos “*4. Relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.*”

Sobre el particular es importante hacer mención de la regla decisión contenida en el Auto 919 de 2021, en el cual la Corte Constitucional al resolver conflicto de jurisdicciones indicó:

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de demandas mediante las que se pretenda el reconocimiento pensional de una persona que fue empleada pública, solicitó el reconocimiento pensional en dicha calidad y está afiliada a un régimen administrado por una persona de derecho público.

Además, se debe recordar, que por tratarse de falta de “*jurisdicción*” no es posible la prórroga de la competencia, por cuanto se trata de un vicio que se extiende a toda la actuación por desconocer el juez natural de la causa (sentencia T-064-2016) y en ese sentido al no contar esta Sala con *jurisdicción* para resolver sobre esta pretensión declarará esta condición, **revocando** en este punto la condena impuesta en el numeral 4 de la decisión consultada.

Costas

⁹Entidad que de acuerdo con la Ley 1151 de 2007, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional.

Costas en esta instancia a cargo de **Porvenir S.A. y Colpensiones** por ser desfavorable el recurso interpuesto de conformidad con lo establecido en el numeral 3) del artículo 365 del CGP. Las agencias en favor del demandante y a cargo de cada una de las sociedades recurrentes se fijan en **\$580.000**.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Juez Décimo Laboral del Circuito de Medellín, el día **13 de marzo de 2023**, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **MARÍA ESNEDA GARCÍA BERRIO** contra **PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES, REVOCÁNDOLA** en su numeral 4 en lo referente a la condena al reconocimiento pensional en favor de la demandante, para en su lugar declarar la falta de competencia para resolver respecto de la pensión de vejez, al ostentar la calidad de empleada pública.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de **PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES**. Las agencias en favor del demandante y a cargo de cada una de las sociedades recurrentes se fijan en **\$580.000**.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

LOS MAGISTRADOS

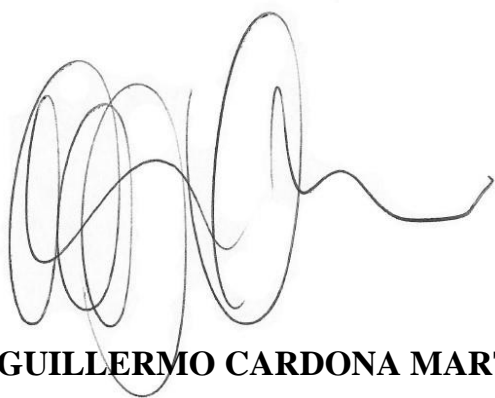


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

Radicado 05001-31-05-010-2020-00221-01
Radicado Interno: P0742323
Asunto: Confirma y revoca sentencia

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a trailing flourish.

GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante	María Esneda García Berrio
Demandado (s)	Protección S.A. y Colpensiones.
Radicado	05001-31-05-010-2020-00221-01
Decisión	Confirma y revoca sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona


El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 25 de mayo de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 25 de mayo de 2023 a las 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO